



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ D.C.

Bogotá D. C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintiuno (2021)

RADICADO: 11001-33-35-026-2021-00201-00
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO
DEL DERECHO
DEMANDANTE: GUILLERMO JOSÉ LINERO
BARLETTA
DEMANDADO: NACIÓN- FISCALÍA GENERAL DE
LA NACIÓN

En el presente asunto, **GUILLERMO JOSÉ LINERO BARLETTA**, presentó demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho contra la **NACIÓN-FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN**, con el objeto de obtener la nulidad de los actos administrativos, por medio de los cuales la demandada negó el reconocimiento y pago de la bonificación judicial como factor salarial para la liquidación de las prestaciones sociales de conformidad con lo establecido en el Decreto 382 del 2013.

No obstante lo anterior, es necesario manifestar que existe causal de impedimento que impide la prosecución del presente asunto por parte del suscrito Juez, de conformidad con las siguientes,

CONSIDERACIONES

Los artículos 130 y 131 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se encargaron de consagrar las causales generales y especiales de impedimento de los Magistrados y Jueces en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y de establecer el procedimiento en caso de evidenciarse la configuración de alguna de aquellas; los mentados enunciados normativos disponen:

***“Artículo 130. Causales.** Los magistrados y jueces deberán declararse impedidos, o serán recusables, en los casos señalados en el artículo 150 del Código de Procedimiento Civil¹ (...)*

***Artículo 131. Trámite de los impedimentos.** Para el trámite de los impedimentos se observarán las siguientes reglas:*

1. El juez administrativo en quien concurra alguna de las causales de que trata el artículo anterior deberá declararse impedido cuando advierta su existencia, expresando los hechos en que se fundamenta, en escrito dirigido al juez que le

¹ Debe entenderse la remisión normativa al Código General del Proceso.

siga en turno para que resuelva de plano si es o no fundado y, de aceptarla, asumirá el conocimiento del asunto; si no, lo devolverá para que aquel continúe con el trámite. Si se trata de juez único, ordenará remitir el expediente al correspondiente tribunal para que decida si el impedimento es fundado, caso en el cual designará el juez ad hoc que lo reemplace. En caso contrario, devolverá el expediente para que el mismo juez continúe con el asunto.

2. Si el juez en quien concurra la causal de impedimento estima que comprende a todos los jueces administrativos, pasará el expediente al superior expresando los hechos en que se fundamenta. De aceptarse el impedimento, el tribunal designará conjuez para el conocimiento del asunto.

(...)

7. Las decisiones que se profieran durante el trámite de los impedimentos no son susceptibles de recurso alguno.”

A su vez el artículo 141 del Código General del Proceso, determina las hipótesis en las cuales los magistrados y jueces de la república, deben declararse impedidos por encontrarse incursos en causales de recusación.

En efecto dispone la norma:

“Artículo 141. Causales de recusación. *Son causales de recusación las siguientes:*

1. Tener el juez, *su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, **interés directo o indirecto en el proceso.**”*

Conforme a lo expuesto, es pertinente señalar que en mi condición de titular del Juzgado Veintiséis Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá, se configura la causal de impedimento. Lo anterior en razón a que el objeto de discusión del presente proceso es el carácter salarial del porcentaje devengado a título de “bonificación judicial”, que no ha sido tenido en cuenta para la liquidación de las prestaciones sociales.

Recuerda el Despacho, que el Decreto 383 de 2013, **“Por el cual se crea una bonificación judicial para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar y se dictan otras disposiciones”**, incluyó dentro de los destinatarios de la bonificación aludida a los Jueces categoría circuito, determinando las condiciones para su reconocimiento y la forma de remuneración en los siguientes términos:

“Artículo 1. *Créase para los servidores de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar a quienes se les aplica el régimen salarial y prestacional establecido en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995 y que vienen rigiéndose por el decreto 874 de 2012 y las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, una bonificación judicial, la cual se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud. La bonificación judicial se reconocerá a partir del 10 de enero de 2013, se percibirá mensualmente, mientras el servidor público permanezca en el servicio y corresponde para cada año al valor que se fija en las siguientes tablas, así:*

(...)

3. Para los cargos de los Juzgados de Circuito, Especializado, Juzgados de Tribunal Penal Militar y Juzgados de Justicia Penal Militar, relacionados a continuación la bonificación judicial, será:

Denominación cargo	MONTO DE LA BONIFICACIÓN JUDICIAL A PAGAR MENSUALMENTE CADA AÑO					
	Año 2013	Año 2014	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018
Juez del Circuito	539.991	1.059.365	1.578.739	2.098.112	2.617.486	3.136.860

(...)

Parágrafo. La bonificación judicial creada en el presente artículo se ajustará a partir del año 2014 de acuerdo con la variación del índice de Precios al Consumidor (IPC); en consecuencia no le aplica el incremento que fije el Gobierno Nacional para las asignaciones básicas en el año 2013 y siguientes. A partir del año 2014 y hasta el año 2018, los valores señalados en las tablas del presente artículo contienen un ajuste equivalente a una variación proyectada del índice de Precios al Consumidor (IPC) del dos por ciento (2%) respecto del valor de la bonificación judicial asignada en el año inmediatamente anterior. En el evento en que la variación del índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para las vigencias fiscales de los años 2014 a 2018 inclusive, sea diferente al dos por ciento (2%) proyectado para el valor de la bonificación judicial para los mismos años, el Gobierno Nacional ajustará las tablas correspondientes para la respectiva vigencia en la diferencia que se presente. Para el año 2019 y en adelante el valor mensual de la bonificación judicial será equivalente al valor que se perciba en el año inmediatamente anterior reajustado con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE”.

Con base en lo anterior, el suscrito Juez percibe la denominada **“bonificación judicial”** y en virtud de esa circunstancia me asiste interés directo en las resultas del proceso, **pues si bien una y otra bonificación se encuentran reguladas en instrumentos normativos diferentes, se podría llegar a considerar como legítima la reclamación relativa a que dicho emolumento sea constitutivo de salario para la liquidación de prestaciones sociales y demás prestaciones económicas derivadas de la actividad de administración de justicia, razón por la cual se configura la causal de impedimento.**

La anterior consideración, se expone en concordancia con los recientes pronunciamientos del Consejo de Estado. Alto Tribunal que en providencia del 27 de septiembre del 2018, con radicado número: **25000-23-42-000-2016-03375-01(2369-18)**, Consejera Ponente, **SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ**, dispuso:

“Ahora bien, como se expuso, la actora está regulada por el régimen especial de la Fiscalía General de la Nación, en cuyo artículo 4º ibídem contempló la denominada «prima especial, sin carácter salarial»; por consiguiente, se encuentra contemplada en una disposición diferente a aquella que contempló dicho emolumento para los magistrados, entre otros, del Consejo de Estado, pues de ello se ocupó el legislador a través del artículo 15 de la Ley 4ª de 199210. De lo anterior, se extrae que si bien una y otra prima especial se encuentran reguladas en instrumentos normativos diferentes, lo cierto es que el objeto de discusión en este proceso es el carácter salarial del porcentaje devengado a título de prima especial de servicios, que no ha sido tenido en cuenta para la liquidación de las prestaciones sociales, lo que podría conllevar a un beneficio para los Magistrados que integran esta Corporación.

(...)

Por lo anterior, los integrantes de esta Sala de Sección consideramos que nos encontramos inmersos en la causal de impedimento prevista en el numeral 1º del

artículo 14112 del Código General del Proceso, texto aplicable por la integración normativa especial del artículo 130 del CPACA13, el cual consagra lo siguiente: «1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, **interés directo o indirecto en el proceso.**»

La intervención como jueces de conocimiento, afectaría la posición de neutralidad que debe caracterizar al funcionario judicial. El interés indirecto que tiene el conjunto de magistrados en la actuación judicial, hace que no se preserve la idoneidad suficiente que podría llevar a alterar el juicio de los funcionarios, restándole eficacia a los atributos de independencia, equilibrio e imparcialidad que deben determinar la función judicial.

Por ello, resulta razonable y necesario, en procura de preservar estos valores y conforme a la ley, los suscritos Consejeros de Estado sean marginados del conocimiento de este proceso.

En consecuencia y por comprender el impedimento a la totalidad de los Magistrados que integran la Sección Segunda que es la competente para conocer exclusiva y privativamente del asunto, se ordenará remitir el impedimento a la Sección Tercera del Consejo de Estado para que decida la aceptación o no del mismo, tal como lo establece el numeral 4° del artículo 131 de la Ley 1437 de 2011.²

De este modo, es claro que el hecho constitutivo de ser destinatarios de la misma prestación laboral compromete mi imparcialidad como Titular del Despacho y administrador de justicia. Circunstancia por la cual considero que el impedimento tiene alcance colectivo por encontrarse los demás Jueces Administrativos bajo las mismas circunstancias de carácter general, no obstante de lo anterior, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha considerado necesario, en estos casos, remitir al Juzgado que sigue en turno para resolver lo pertinente.

Ahora, si bien el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo, en su Artículo 131 numeral primero, dispone que el juez que se declare impedido debe explicar las razones y enviar el proceso al juez que le sigue en turno, para que éste resuelva si es fundado y conoce el proceso, o si no lo es y lo devuelve, mediante el Acuerdo PCSJA21-11738 del 5 de febrero de 2021, el Consejo Superior de la Judicatura creó dos juzgados administrativos transitorios en Bogotá, para conocer de los procesos generados en las reclamaciones salariales y prestaciones contra la Rama Judicial y entidades con régimen similar, que se encontraban a cargo de los despachos transitorios que operaron en 2020, así como de los demás de este tipo que reciban por reparto.

De igual manera, recientemente mediante el Acuerdo PCSJA21-11793 de 2 de junio de 2021, se creó el Juzgado Tercero Administrativo Transitorio en Bogotá.

Así las cosas, y de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo CSJBTA-44 del 9 de junio de 2021, se remitirá el expediente al mentado Juzgado Tercero Administrativo Transitorio del Circuito de Bogotá para su conocimiento y en aras de las garantías de tutela judicial efectiva y pronta administración de justicia. Lo anterior, teniendo en cuenta que, de surtirse la remisión del expediente a quien le sigue en turno y este a su vez, también eventualmente considere que se encuentra impedido, deberá proseguirse el turno sucesivamente hasta que llegue el expediente a un despacho que considere que no está inmerso en impedimento alguno, generándose una mora y una afectación a los derechos del ciudadano que

² CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B. Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

reclama justicia, aspecto que no se compadece con la creación de los Juzgados Transitorios.

En merito de lo expuesto, el Despacho,

RESUELVE

PRIMERO.- DECLÁRESE IMPEDIDO el suscrito Juez, para conocer del presente asunto, por asistir interés directo en las resultas del proceso, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 130 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 21 de la ley 2080 del 2021, y el artículo 141 de la Ley 1564 de 2012, de conformidad con las consideraciones expresadas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO.- ENVIAR el expediente al **Juzgado Tercero Administrativo Transitorio de Bogotá**, para que resuelva sobre este impedimento.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

CA



Firmado Por:

Andres Jose Quintero Gnecco
Juez Circuito
Sala 026 Contencioso Admsección 2
Juzgado Administrativo
Bogotá D.C., - Bogotá, D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **1ffb4847e482d2b1e73e498d9179ad51cbfe25dddbb81a95c4053bd6e64bf926**
Documento generado en 27/07/2021 12:15:41 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>